

Notas del trimestre

México y España: vinculación por coincidencias

La alianza y colaboración entre las clases sociales y no el enfrentamiento ni la polarización de intereses han sido los baluartes por excelencia proclamados por el régimen de López Portillo; la elasticidad y la apertura, la búsqueda de la reconciliación entre las distintas fuerzas sociales, los del actual gobierno español.

Mientras el gobierno mexicano se debate por crear un clima de confianza que anime la inversión nacional y extranjera y el retorno de los capitales que salieron del país a raíz de las devaluaciones, en España el imperativo, según los propios partidos de izquierda, es no asustar por ningún motivo ni a la pequeña ni a la gran burguesía, para evitar la fuga de capitales, dado que todavía está muy presente el fantasma de la guerra civil.

El llamado a erradicar disyuntivas ineludibles, la solicitud presentada a las clases económicamente dominantes para que cooperen con el Estado y el ruego a los sectores populares para que pospongan sus luchas particulares con miras a solucionar conjuntamente los graves problemas económicos, tienden hoy un puente entre dos Estados con sistemas políticos en apariencia opuestos.

En efecto, en un brevísimo lapso de escasos 20 días México ha dado pasos decisivos para estrechar sus lazos de manera formal y definitiva con la monarquía española. El último de ellos, y quizás el más significativo, pero el menos sorprendente, la designación del expresidente Gustavo Díaz Ordaz como embajador mexicano en España, ha venido a coronar un proceso que se iniciara el pasado 18 de marzo con la cancelación de los nexos con la república en el exilio, seguido casi inmediatamente por el establecimiento de relaciones diplomáticas. La celeridad con la que estos acuerdos fueron concertados, ha levantado múltiples interrogantes e interpretaciones acerca de los verdaderos motivos que los impulsaron.

Es indudable que ha habido un viraje en nuestra política exterior. México no apoya más a la república del "éxodo y el viento" y reconoce oficialmente al gobierno de Juan Carlos. La justificación pública alude al anuncio e inicio en la hermana monarquía hispana de una revisión flexible de los patrones políticos, orientada hacia la plena democratización.

Hace 40 años rompimos con un régimen ilegítimo, favorecido por el

nazifascismo; hace apenas año y medio México demandó la expulsión de España de las Naciones Unidas, porque ahí se violaban expresamente los derechos humanos. Hoy, una vez dictada la amnistía a los presos políticos, una vez promulgada la ley electoral que dará cabida al juego pluripartidista en las próximas elecciones parlamentarias y declarada ya la disposición del gobierno a legalizar los partidos de oposición, los antiguos argumentos quedan sin sostén alguno.

En el ámbito de la opinión pública flotan hipótesis encontradas. Los amantes de la perspectiva voluntarista atribuyen el establecimiento de la línea directa con España única y exclusivamente a los designios personales de un presidente, quien, por sus confesados antecedentes y legados criollos, representa la persona idónea para llevar a efecto este cometido.

La noticia ha provocado desde acaloradas denuncias, hasta apoyos entusiastas. Para los indignados no sólo se ha traicionado una posición consagrada para ejercer presión a favor de la libertad española, sino que se ha caído en la incongruencia absoluta, ya que por un lado siempre se reclamó la democratización del régimen español como condición necesaria para establecer relaciones, pero por otro finalmente se optó por un representante oficial, muy vivo aún en la memoria de algunos sectores por la represión que ejerciera sobre el movimiento estudiantil de 1968. Para los satisfechos, lo importante del acontecimiento, medido por encima de los intereses de facciones, es que se ha hecho posible el tan anhelado acercamiento formal de dos pueblos cultural y espiritualmente identificados. Para estos últimos, el nombramiento de Díaz Ordaz constituye un gran acierto, dado su manifiesto hispanismo, reflejado en sus prolongadas estadías en España.

No parece viable que las razones que motivaron "las nupcias con la monarquía", como dijera nuestro canciller, sean simplemente afectivas. Existen factores de mucho mayor peso, como son el momento preciso por el que atraviesan tanto España como México y las estrategias económicas generales que ambos países han elegido a mediano plazo.

Internamente España, al igual que México, se enfrenta al problema de fortalecer a toda costa la capitalización y de salir de la situación de exceso de importaciones, para librarse del oneroso endeudamiento externo. Para España la meta es ingresar al Mercado Común Europeo; para México, diversificar el mercado de sus exportaciones, y España se presenta como la puerta para el resto de Europa. Ambos están decididos a pactar con los sectores más dinámicos de la iniciativa privada. Y esta decisión ha dado forma precisa a sus políticas económicas internas y por ende a las externas. Como alguna vez afirmara Vicente Lombardo Toledano, "la política exterior es siempre reflejo de la política interior". El divorcio entre ella no puede por tanto prolongarse demasiado, ni siquiera a nivel de la mera retórica.

Nuestra anterior política exterior destacó en todos los foros internacionales por la apertura de relaciones con Estados socialistas y por la impugnación permanente a las políticas egoístas de los países altamente desarro-

llados, hasta ahora fuentes únicas de crédito externo. Actualmente un mínimo de coherencia exige que esta apertura se canalice hacia países que como México están decididos a reivindicar a sus sectores comerciales y financieros, deponiendo por el momento la defensa de los intereses de los más débiles.

Hasta 1973 España obtenía un superávit en su balanza de pagos gracias a los 3 000 millones de dólares anuales que el turismo aportaba y gracias a los saldos positivos en su balanza de servicios. A partir de entonces el desequilibrio persistente de su balanza comercial se ha ido agravando como consecuencia de las importaciones de materias primas y de las fuertes facturas por concepto de petróleo. Para 1975 el déficit en su balanza alcanzó la suma de 8 574 millones de dólares, lo cual obligó a España a incrementar su deuda externa y las inversiones extranjeras. Las relaciones con México prometen ser un alivio, dadas las reservas petrolíferas con las que contamos.

La situación española reclama para su solución lógica el abandono de decisiones económicas aisladas y la plena acogida a decisiones de conjunto. La alternativa económica que España ha elegido, es la delineada no sólo por su propia burguesía, sino por la europea en general; su opción política no puede, por tanto, ser otra que su democratización, ya que ésta sirve mejor a los intereses económicos que subsidia.

El Tratado de Roma, que diera origen al Mercomún, estipula que sus miembros deben ser democráticos, no dictatoriales. El presidente del Partido Liberal Italiano ha urgido ya a su gobierno para que apoye el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea, una vez que el proceso de democratización cumpla el paso decisivo de las elecciones previstas para junio próximo. Por otra parte, la enfática campaña en favor de los derechos humanos emprendida por Carter ha derivado en la revaluación de su partida de ayuda exterior por 7 400 millones de dólares, mediante la cual los Estados Unidos se comprometen a reducir considerablemente su asistencia a aquellos países donde esté en duda el respeto a los derechos humanos.

En México las energías del gobierno han cambiado de rumbo. Lo prioritario ya no es impulsar las áreas de beneficio social, sino financiar aquellas eminentemente productivas, a sugerencia del Fondo Monetario Internacional y como condición para mantener el crédito abierto con dicha institución. Se ha dejado atrás la impugnación y fiscalización de los grupos económicamente hegemónicos, para dar paso a una época encaminada a incrementar sus ya cuantiosas ganancias, pero ahora con el reconocimiento público de su labor.

México y España han aceptado los imperativos y la razón del intercambio comercial. Las relaciones entre ellos han sido vistas con beneplácito por los grandes intereses comerciales de los dos países. Baste recordar que aun antes del derrocamiento del franquismo y en el momento en que se anunciara el rompimiento de relaciones comerciales y culturales siempre vigentes, grandes monopolios, como el de Televisa, emprendieron una ex-

tensa campaña en contra de la política exterior echeverrista y a favor del restablecimiento de dichos vínculos.

Las tan controvertidas noticias han venido a confirmar la frase de Lombardo. Los acontecimientos diplomáticos sólo ratifican el imperio de las razones más poderosas, aun cuando en algunos momentos se realicen grandes esfuerzos para negarlo.

Es en este marco precisamente donde se inserta casi naturalmente el nombramiento de nuestro embajador. La aclamada alianza entre las distintas clases parece extender sus tentáculos a un pacto entre los diferentes grupos políticos, a la reunificación de la familia revolucionaria. No hay que olvidar que incluso rompiendo con la tradición política mexicana se ha permitido la salida a la luz pública a aquel que fuera el más grande opositor en la contienda por la sucesión.

La figura de nuestro expresidente resulta, por una parte, satisfactoria para los españoles por su reconocida devoción a aquella "mitad de su ser nacional". Por otra, la línea política que encabeza concuerda fielmente no sólo con la estrategia global de nuestro régimen actual, sino con las reglas del juego de la movilidad política mexicana, que impiden la reubicación del grupo político vinculado con el presidente inmediatamente anterior, pero que sí permiten la rehabilitación en el escenario político de aquel grupo que haya observado disciplinadamente su entierro sexenal.

No resulta sorprendente el resurgimiento de un grupo político identificado con los grandes intereses económicos; dos de sus miembros forman parte del propio gabinete lopezportillista. Si Díaz Ordaz tiene o no intereses económicos personales en España, es algo que no puede afirmarse; lo que sí es un hecho es que su condición de expresidente no inmediatamente anterior, a la vez que lo libera de toda sospecha de intención de maximato, lo coloca en una posición privilegiada para absorber una autonomía considerable en la determinación de las decisiones sobre el tipo de intercambios a realizarse.

Díaz Ordaz no será un embajador estrictamente profesional, ni eminentemente cultural, pero no cabe duda que sabrá impulsar con eficacia sustanciosos intercambios comerciales, reflejando fielmente la política interna mexicana.

7 de abril de 1977

Jacqueline Peschard